



AMPLIACIÓN RESPONSABLE DE LA FRONTERA AGRÍCOLA

Cómo lograr mayor seguridad y soberanía alimentaria



RESUMEN

La intención de ampliar la frontera agrícola boliviana, de 3 millones a 13 millones de hectáreas en los próximos 10 años, ha cobrado mucha atención sobre todo entre empresarios agroindustriales y actores estatales. Se justifica esta intención con el argumento de que ello garantizará la seguridad y soberanía alimentaria para todos los bolivianos.

En este documento, se advierte que hace falta mayor reflexión y debate para planear formas más razonables y estratégicas de ampliación de tierras de cultivo, que sean social y ambientalmente sostenibles.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la idea de iniciar un proceso agresivo de ampliación de la frontera agrícola ganó mucho terreno en la agenda de la agroempresa cruceña y del gobierno nacional. El argumento principal consiste en que una mayor producción agropecuaria en las nuevas áreas de cultivo traerá consigo seguridad alimentaria para los bolivianos y Bolivia se convertirá en uno de los mayores exportadores de alimentos para el mundo.

Esta agresiva agenda se ha convertido en uno de los temas más importantes en el campo agrario

y rural. En primer lugar, la meta de ampliar la frontera agrícola a un ritmo de un millón de hectáreas por año es sumamente ambiciosa. En segundo lugar, las zonas de expansión serían aquellas circundantes a las actuales zonas cruceñas de producción agroindustrial, es decir, tendría que ocurrir a costa de la deforestación de bosques, mercantilización de tierras fiscales o estatales a favor de grandes propietarios y probablemente afectando territorios indígenas y comunidades campesinas.



LIMITACIONES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

El trabajo de investigación “Expansión de la frontera agrícola: luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano”, al analizar cómo opera la apropiación de la tierra en las zonas de expansión, concluye que son dinámicas que tienen lugar en respuesta a la demanda internacional de materias primas agrícolas. Por tanto, la expansión de tierras cultivables no responde a necesidades nacionales de seguridad y soberanía alimentaria. Algunos resultados se presentan a continuación.

La ampliación de la frontera agrícola no tiene relación directa con la seguridad alimentaria

El incremento sostenido de la expansión de tierras de cultivo comenzó a inicios de 1990. Un factor que influyó fue el proyecto “Tierras bajas del Este” del Banco Mundial que tenía por objetivo ampliar la agricultura comercial y rentable a través de la producción de soya y trigo. En el contexto regional de esa época, capitales brasileños y argentinos comenzaron a incursionar en el sector sojero de Paraguay, Uruguay y Bolivia. De manera similar a la actual iniciativa, el proyecto del Banco Mundial fue concebido con el argumento de contribuir al despegue del crecimiento económico de Bolivia y al desarrollo de una agricultura comercial sostenible. Sin embargo, años más tarde, el propio organismo internacional reconoció que el proyecto tuvo éxitos pero a costa del incremento descontrolado de la deforestación, de 25 mil hectáreas planificadas al inicio a cerca de un millón de hectáreas.

La habilitación de más tierras de cultivo favoreció el auge del complejo oleaginoso (soya, girasol y sorgo) mientras que otros cultivos de valor comercial como caña de azúcar, maíz y trigo permanecieron dentro del grupo de cultivos de “crecimiento lento”. La soya comenzó a emerger como el cultivo predominante. Entre 1990 y 2010 la producción de este cultivo en Santa Cruz se multiplicó más de ocho veces, desde 232.743 toneladas hasta 1.917.150 toneladas, mientras que la superficie cosechada se expandió más de seis veces, desde 143.372 hasta 922.115 hectáreasⁱⁱ. Aunque este ritmo de crecimiento es bastante significativo, Bolivia aún produce menos soya que Uruguay y Paraguay.

Estos son algunos de los temas y datos de lo sucedido hasta ahora que no han sido tomados en cuenta o solo han sido abordados de forma marginal para justificar las propuestas recientes de iniciar un nuevo ciclo más agresivo de expansión de tierras agrícolas.

La ampliación de la frontera agrícola tiene control oligopólico

En las principales zonas de expansión cruceña, quienes tienen control sobre las tierras productivas son los grandes empresarios cruceños, agroindustriales y ganaderos. Juntos controlan al menos el 70 por ciento

de las tierras dedicadas a la actividad agropecuaria. El resto está en manos de colonizadores andinos, menonitas y japoneses. Los territorios de los pueblos indígenas están en los márgenes de las tierras cultivadas y suman aproximadamente 14 millones de hectáreas. Esta estructura agraria regional debe ser entendida en conexión con los capitales que controlan la cadena de valor del sector sojero.

Más del 90 por ciento de la exportación de soya y derivados está en manos de las cinco principales compañías agroindustriales que operan en Bolivia. Entre estas compañías están los agronegocios más importantes del mundo como Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargil y Bunge. Este grupo junto con Intersoja S.A. Urigeler Internacional e Industrias Oleaginosas dominan el complejo oleaginoso y expanden sus operaciones hacia múltiples sectores (servicios financieros, asistencia técnica, provisión de fertilizantes, pesticidas y biotecnología).

Hoy en día, el paisaje cruceño está dominado por grandes silos de acopio de granos, modernas maquinarias e instalaciones agrícolas y extensas tierras en las que crecen cultivos de soya transgénica habilitadas a costa del bosque. Es una nueva e intensa dinámica agraria dirigida por intereses económicos del sector privado que apuntan a la expansión de la frontera agrícola y a establecer operaciones a gran escala de producción de materias primas agrícolas para la exportación.

Es un modelo socialmente excluyente

En los hechos, la expansión de la frontera agrícola consolida una economía regional de carácter excluyente que está escasamente conectada a las políticas agrarias nacionales. Provocó la caída abrupta de las tasas de migración desde tierras altas hacia tierras bajas y crecimiento marginal de la población ocupada en las zonas de expansión. Esto es así porque la agricultura comercial con las características descritas se basa en el uso intensivo de capital y tecnología antes que en mano de obra. Ciertamente no es un proceso de despojo directo o expulsión de campesinos pero tiene consecuencias sobre la mayoría rural compuesta de campesinos e indígenas.

Así, el problema fundamental es la negación de la propiedad y acceso a la tierra a los campesinos pobres y a campesinos sin o con poca tierra. Es un contexto adverso para ellos porque sus demandas de redistribución equitativa de la tierra no tienen posibilidad de materializarse. En las zonas de expansión cruceña, la población ocupada en la agricultura creció tan solo en 7% entre los censos 2001 y 2012, mientras que en otros sectores económicos de la misma región aumentó en 93%. Esto ratifica la constatación de que más tierras bajo cultivo no generan oportunidades de acceso a la tierra o empleo para los trabajadores.

En suma, es ineludible preguntarnos cuál es la contribución de la agricultura comercial para la seguridad y soberanía alimentaria de este tipo de agricultura comercial que tiene lugar en las zonas de ampliación de la frontera agrícola. La producción de materias primas agrícolas para la exportación no tiene relación directa con la seguridad alimentaria nacional y si esta tendencia no cambia, el abastecimiento de alimentos será más inestable y crecientemente dependiente de las importaciones.



PROPUESTAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS

Los planteamientos expuestos aquí buscan estimular el debate informado sobre tierra y seguridad alimentaria en el contexto de los cambios que experimenta el agro boliviano.

Este trabajo es parte de la investigación que desarrolla TIERRA en el proyecto "Seguridad Alimentaria, Tierra y Territorio en Bolivia", con el apoyo del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC) desde la gestión 2011.

QUIÉNES SOMOS

TIERRA es una organización no gubernamental con sede principal en la ciudad de La Paz-Bolivia.

Tenemos tres oficinas regionales: Regional Altiplano en La Paz, Regional Valles en Sucre y Regional Oriente en la ciudad de Santa Cruz.

Trabajamos con investigación y acción en temas agrarios y rurales. Buscamos contribuir al entendimiento de las causas de la pobreza y desigualdad que afectan principalmente a los campesinos, originarios e indígenas de Bolivia.

La ampliación de la frontera agrícola causa deforestación de bosques en las tierras bajas. Según el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal se estima que en el país existen 5 millones de hectáreas deforestadas ilegalmente. De éstas, el 38% habría sido causado por el sector ganadero (1.9 millones de ha), el 28% por la agroindustria (1.4 millones), el 17% por colonizadores extranjeros (850 mil ha), el 12% por campesinos (600 mil ha) y el 5% por pueblos indígenas (250 mil ha) (INIAF, 2011).



IMPlicACIONES Y RECOMENDACIONES

La puesta en producción de nuevas tierras para multiplicar al menos por cuatro veces la actual superficie cultivada en apenas 10 años, es una de las metas más ambiciosas que el Estado boliviano se ha planteado en las últimas décadas. Es parte central de la Agenda Patriótica 2025 al menos en cuatro de los trece pilares: soberanía productiva sin la dictadura del mercado capitalista; soberanía sobre los recursos naturales; soberanía alimentaria a través de saber alimentarse para Vivir Bien y; soberanía ambiental con desarrollo integral y respeto a los derechos de la Madre Tierra. Una primera recomendación es situar y dimensionar esta temática según este marco de referencia.

Para avanzar hacia una política responsable de ampliación de la frontera agrícola, las futuras discusiones deberían tomar en cuenta las siguientes sugerencias o recomendaciones.

- Identificar con rigurosidad la ubicación, el potencial productivo y los derechos de propiedad de las tierras que serán puestas bajo producción. Este tema es central y debiera constituir el punto de partida para los programas productivos que se planea ejecutar en los próximos diez años.
- Establecer desde el inicio las prioridades de producción agrícola en las nuevas zonas para evitar que las nuevas tierras estén solo o mayormente destinadas para la producción transgénica de más materia prima agrícola para su exportación. Este punto también es una pieza clave para conectar y

establecer relaciones explícitas entre frontera agrícola y seguridad con soberanía alimentaria.

- Abrir un dialogo plural y de análisis crítico sobre quién se beneficiará con las nuevas tierras y con la renta agraria que genere su usufructo. El debate debería girar en torno a las demandas de los movimientos campesinos, por ejemplo, sobre el “derecho a tener derechos sobre los alimentos”ⁱⁱⁱ.
- Discutir e identificar con mayor claridad el papel que los campesinos parcelarios y los pueblos indígenas de las TCO tendrán en la agenda de seguridad y soberanía alimentaria y específicamente en los planes de expansión de la frontera agrícola. Esto implica evaluar la situación de los “campesinos a medio tiempo” que se encuentran en desventaja, sin posibilidades de trabajar plenamente sus pequeñas parcelas minifundiarias y sin posibilidades de integrarse de forma plena dentro de otros sectores de la economía boliviana.

Referencias y mayor información:

- IBCE (2013) Privados aceptan reto de ampliar frontera agrícola con apoyo estatal. <http://goo.gl/nrjF4T>
- FAO (2013) Food and Agriculture Organization. FAOSTAT. <http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/S>
- Esta frase pertenece a Raj Patel (2009), What does food sovereignty look like?

Este documento está basado en la publicación Colque, G. (2014) “Expansión de la frontera agrícola: luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano”. La Paz: TIERRA.